



RI-JG

RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

INTERESADO:

EXPEDIENTE: 001 – 011462.

Con fecha 27 de enero de 2017 tuvo entrada en la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información, solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, presentada por , solicitud que quedó registrada con el número 001 – 011462.

En ella solicitaba:

“información sobre cuantías bonificadas a las empresas ELPOZO ALIMENTACION S.A, PROCAVI S.L. y HALIA SERVEX en los ejercicios de 2010 a 2016 en concepto de ayudas a la formación para el empleo, así como a las acciones formativas están asociadas dichas cuantías”.

Con fecha 30 de enero de 2017 esta solicitud se recibió en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para su resolución. No obstante, con fecha de 28 de febrero de 2017 esta Dirección General acuerda ampliar otro mes el plazo para resolver, según lo dispuesto, igualmente, en el mencionado artículo 20.1.

En primer lugar, se concede el acceso a la información respecto a las cuantías bonificadas a las empresas EL POZO ALIMENTACION S.A, PROCAVI S.L. y HALIA SERVEX en los ejercicios de 2010 a 2016, en los siguientes términos:

Cuantías bonificadas de las entidades El Pozo, Procavi y Halia Servex. Ha de tenerse en cuenta que los datos correspondientes a 2016 son parciales ya que los últimos ficheros recibidos de la TGSS son los correspondientes a las bonificaciones realizadas en el mes de noviembre.

Bonificación aplicada en TGSS

Año	EL POZO	PROCAVI	HALIA SERVEX
2010	244.324,50	21.312,75	-
2011	162.405,56	16.941,08	-
2012	478.666,70	21.579,00	-
2013	298.677,95	25.059,69	1.286,35
2014	312.603,95	27.335,00	10.004,10
2015	216.045,65	29.321,45	12.538,26
2016 (*)	26.084,66	448,18	851,82



(*) *Los últimos ficheros recibidos de la TGSS son los correspondientes a las bonificaciones realizadas en el mes de noviembre de 2016.*

En segundo lugar, y en lo que se refiere a las acciones formativas asociadas a las cuantías bonificadas de las empresas objeto de la solicitud, de acuerdo con las letras h), i) y j) del apartado 1 del artículo 14 de la citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para “los intereses económicos y comerciales”, “la política económica y monetaria” o para “el secreto profesional (...)”, respectivamente.

Una vez analizada la solicitud, esta Dirección General considera que la misma incurre en los supuestos contemplados en el párrafo anterior respecto a las acciones formativas asociadas a las cuantías bonificadas, ya que ello supondría invadir el ámbito particular de la propia empresa respecto a las decisiones adoptadas en su seno en relación con una materia tan importante como es la formación de sus empleados que se considera estratégica para la misma y que guarda o puede guardar relación con la competitividad de la misma.

Y esto es así, porque la aplicación de los límites antes mencionados debe estar justificada y ser proporcionada a su objeto y finalidad de protección, y atenderá a las circunstancias concretas del caso (artículo 14.2 de la citada Ley 19/2013). Estos límites atienden al necesario equilibrio entre la transparencia y la protección de otros bienes o intereses públicos o privados.

En este supuesto, proporcionar la información solicitada podría facilitar a otras entidades una información valiosa, a través del conocimiento de la formación que está impartiendo a sus trabajadores, de hacia donde dirige la entidad sus pasos. Por lo tanto, facilitar esta información podría suponer un perjuicio para los intereses económicos y comerciales de la entidad de que se trate, ya que podría ser utilizada de manera ventajosa por otras entidades, competidores reales o potenciales.

Por ello, realizando una ponderación suficientemente razonada del interés del tercero y los derechos del afectado, se considera que la información solicitada sobre las acciones formativas desarrolladas no debe facilitarse.

No puede obviarse que, de acuerdo con la normativa de aplicación (tanto en materia de formación profesional para el empleo como en el Estatuto de los Trabajadores), la empresa ha tenido que someter el plan de formación a informe de su representación legal de los trabajadores, y que uno de los deberes que tienen estos representantes es, precisamente, el de sigilo respecto de la información que le facilita la empresa (artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores). Por ello, si ahora se facilitara la información relacionada con las acciones formativas, dicho deber quedaría vacío de contenido, lo que supondría un contrasentido.



En un caso como el presente se entiende que la solicitud de conocimiento de las acciones formativas concretas por cuya ejecución se ha bonificado el interesado, que lógicamente se encuadran dentro del plan de formación de dicha empresa, no queda amparada por el objetivo de transparencia que establece en la Ley.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en las letras h) i) y j) del apartado 1 del artículo 14 de la citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, **se inadmite a trámite la solicitud de acceso a la información pública** en cuanto a las acciones formativas asociadas a las cuantías bonificadas a las empresas EL POZO ALIMENTACION S.A, PROCAVI S.L. y HALIA SERVEX en los ejercicios de 2010 a 2016 en concepto de ayudas a la formación para el empleo.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

Madrid, a 16 de marzo de 2017
EL DIRECTOR GENERAL



Julio Ángel Martínez Merono.